La «soberanía limitada» en la UE

Todo comenzó cuando los checoslovacos decidieron abrir las ventanas en 1968. Alexander Dubček (1921-1992) pretendía reformar el modelo comunista que los soviéticos habían impuesto en su esfera de influencia. Quería un «socialismo con rostro humano», lo que en términos prácticos significaba, por ejemplo, cierta libertad de expresión, de información y de creación y algunos cambios económicos. En realidad, no era nada radical, pero en los sistemas comunistas toda apertura era no sólo radical, sino peligrosa. Un proceso reformista en Checoslovaquia podía extenderse al resto del bloque oriental. Leonid Brezhnev (1906-1982), secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, decidió abortar el ciclo de reformas antes de que pudiesen consolidarse: un ejército de tropas del Pacto de Varsovia invadió Checoslovaquia y lo sofocó todo.

En septiembre, Brezhnev trató de justificar ideológicamente la agresión contra otro Estado que, además, formaba parte del bloque oriental. Así nació la llamada «doctrina de la soberanía limitada» o Doctrina Brezhnev: los países socialistas deberían ser libres para determinar su camino, pero «ninguna de sus decisiones debería perjudicar al socialismo en su país ni los intereses fundamentales de otros países socialistas». Esto significaba, en términos prácticos, que ningún país era libre para alejarse del comunismo. Quien lo hiciese se exponía, como los checoslovacos, a una invasión.

Esta idea de la soberanía limitada venía revestida, naturalmente, de toda la retórica comunista en torno a la naturaleza democrática de los regímenes socialistas -las llamadas «democracias populares», cuya historia escribió Ferenc Fejtő (1909-2008)- y de ruidosas advertencias contra las conspiraciones capitalistas que amenazaban el avance del comunismo.

Algo de esta doctrina, que justifica intervenciones contra la soberanía de otros países, parece haber contaminado la Unión Europea. En Rumanía, Alemania y Francia ha habido distintos movimientos para impedir candidaturas o gobiernos de derecha soberanista. Allí se descalifica a un candidato que antes se había validado. Aquí se forma un cordón sanitario y se aprueba una reforma constitucional con un parlamento saliente. Justo al otro lado de los Pirineos se ejecuta provisionalmente una condena de inhabilitación que aún no es firme.

No entro en la legalidad de las intervenciones, sino en su fondo político e incluso moral: si los ciudadanos de los países votan contra los consensos progresistas que hoy pretende imponer “Bruselas” (valga la metonimia): votan contra la imposición de cuotas de inmigrantes, contra medidas radicales contra el cambio climático o contra la destrucción de sus sistemas económicos, los partidos progresistas y la propia Unión intervendrán para impedirlo. La presión que desde hace años viene sufriendo Hungría es un ejemplo de lo que cabe esperar a quienes desafíen esos consensos.

Así, la Unión Europea y los partidos progresistas que la controlan aspiran a una «soberanía limitada» de las naciones y no sólo a un reparto de competencias con los Estados a partir de los tratados. La «vis expansiva» de las competencias de la Unión y la interpretación extensiva que de ellas viene haciendo el Tribunal de Justicia de la UE han terminado socavando el fundamento mismo de la propia Unión, que es, en última instancia, la soberanía de las naciones que deciden adherirse. La lección del Brexit no parece haber calado en Bruselas.

Sabemos cómo terminó aquello de la «soberanía limitada». En 1989, los pueblos de Europa Central y Oriental desde el Báltico al Mar Negro recuperaron una libertad anhelada desde el final de la II Guerra Mundial. Cuando más se trata de silenciar a las naciones, más clamorosas se hacen sus demandas y más comprometidas quedan las instituciones secuestradas por el progresismo tanto en la UE como en los Estados. Como el Kaspar Utz de la novela homónima de Bruce Chatwin, esas naciones se atreven a algo inconcebible por los tiranos: vivir como si ellos no existieran.